

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
CARRERA 10 CALLE 12 ESQUINA PISO 5 TORRE A
PALACIO DE JUSTICIA - PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
j03pclccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: INCIDENTE DE DESACATO
Accionante: ALDEMIR HURTADO GONZALEZ
Accionado: ARL AXA COLPATRIA
Radicación: 76001-4105-003-2021-00457-00

AUTO INTERLOCUTORIO No. 175

Santiago de Cali, 03 de julio de 2024

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a decidir el incidente de desacato interpuesto por el señor Aldemir Hurtado González, contra la ARL AXA Colpatria, por el incumplimiento de la sentencia No. 202 del 04 de noviembre de 2021, proferida por este Despacho, la cual no fue impugnada; lo anterior, al no hacer la entrega de los medicamentos e insumos prescritos por su galeno tratante el 07 de junio del 2024, así como por no autorizar el servicio de transporte requerido por el señor Hurtado González.

I. TRÁMITE PROCESAL

El accionante, a través de su agente oficiosa, presentó solicitud de iniciar trámite incidental ante el incumplimiento de la sentencia No. 202 del 04 de noviembre de 2021 como quiera que no se le había hecho entrega de los medicamentos e insumos correspondientes a los meses de mayo y junio de 2024, ni autorizado el servicio de transporte requerido por él; ante dicha solicitud se realizaron varios requerimientos¹ sin que la accionada acreditara el cabal cumplimiento de dicho fallo.

Al no haberse acreditado el cumplimiento de la orden judicial por parte de la entidad accionada se inició el incidente de desacato mediante auto No. 166 del 20 de junio de 2024, en contra de la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de ARL AXA Colpatria; y como quiera que el superior incumplió con su obligación de ordenar a su inferior diera cumplimiento al fallo y abrir el respectivo proceso disciplinario, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se inició también el incidente de desacato en contra del señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria; providencia que les fue notificada mediante correo electrónico en la misma fecha.

Luego, el 20 de junio de 2024 la agente oficiosa del accionante allegó a memorial en el cual indicaba que la entidad accionada ya había hecho entrega de los medicamentos e insumos correspondientes al mes de mayo de 2024, pero seguían sin entregar los ordenados por el galeno tratante el 07 de junio de 2024.

¹ Auto No. No. 155 del 12 de junio de 2024 y auto No. 162 del 17 de junio de la misma anualidad.

Posterior a ello, por auto No 171 del 26 de junio de 2024 se abrió el proceso a pruebas; sin que se allegara respuesta que acreditara el cumplimiento a la orden judicial.

II. RESPUESTA DE LA ACCIONADA

➤ AXA COLPATRIA

El día 14 de junio de 2024 allegaron memorial en el cual indican que el pasado 15 de mayo de la misma anualidad hicieron entrega de los medicamentos e insumos ordenados por el galeno tratante el 5 de marzo de 2024 por tres meses; ante lo cual alegan que ha brindado aquellos hasta el mes de junio de 2024.

I. CONSIDERACIONES

3.1. DEL INCIDENTE DE DESACATO

El incidente de desacato es una herramienta legal destinada a obtener el cumplimiento del fallo de acciones constitucionales, entre ellas, la acción de tutela, con miras a restablecer el derecho vulnerado.

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que regula las acciones de tutela, frente al incumplimiento de los fallos consagró la posibilidad de sancionar por desacato tanto al responsable de cumplir la orden como a su superior; el artículo 52 ibídem estipuló la sanción para quien incurra en desacato indicando que ésta sería de arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que la misma normatividad dispusiere otra consecuencia jurídica distinta, así mismo señaló que la sanción debía ser consultada al superior jerárquico.

El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está definido por la parte resolutive del fallo, por lo tanto, tiene la obligación de verificar los siguientes elementos: **a).** Quién es la persona obligada al cumplimiento de la orden proferida en la sentencia de tutela; **b).** El término otorgado para ejecutarla; y **c).** El alcance de la orden. No se trata pues de un nuevo proceso en el cual se pueda entrar a debatir la vulneración o no del derecho, sino que se debe analizar el acatamiento de la orden impuesta por el juez constitucional.

La Corte Constitucional en la sentencia SU – 034 del 3 de mayo de 2018 con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos precisó que al momento de resolver el incidente de desacato a un fallo de tutela, debe establecerse por el juzgador si concurren o no los factores objetivos y/o subjetivos que conllevan a declarar el incumplimiento de la orden de tutela por parte de su destinatario, frente al tema señaló:

“La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces, en examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva decisión judicial. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.

En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso.

(...)

Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato, es menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.

En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto que se ha sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador”.

De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción (...).”

Así las cosas, es obligación del Juez de tutela analizar, previa a la interposición de sanciones, entre otras, la complejidad de la orden impuesta, la capacidad del vinculado al trámite para cumplirla, el vencimiento del plazo para cumplir el fallo; posterior a lo cual hacer un juicio de razonabilidad con el fin de verificar si se presenta responsabilidad subjetiva por dolo o culpa del obligado o si por el contrario este realizó actuaciones positivas con miras a lograr el cumplimiento y por razones ajenas no se ha logrado materializar la orden, evento este último en el cual no habría lugar a la sanción.

3.2. DEL CASO EN CONCRETO

Mediante sentencia de tutela No. 202 del 04 de noviembre de 2021 proferida por este Despacho, la cual no fue impugnada; se tuteló el derecho a la salud del señor Aldemir Hurtado González, ordenándosele a la entidad accionada brindar atención integral en salud a favor del accionante, esto es, autorizar y entregar y/o llevar a cabo todos los medicamentos, insumos, exámenes, terapias, citas médicas y demás que le prescriban sus médicos tratantes y que guarde relación con la

patología que se acreditó en el plenario padece el citado accionante, siendo esta: traumatismo de la médula espinal cervical, disfunción neuromuscular de la vejiga y paraplejia

A juicio de esta operadora judicial, de la lectura del fallo en mención se logra concluir que la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de la ARL AXA Colpatria, es la encargada de cumplir con la orden judicial, quien pese a los requerimientos efectuados por el despacho no allegó prueba que acreditara el haber cumplido a cabalidad con el fallo, a pesar de que la sentencia de tutela data del 04 de noviembre de 2021; lo anterior por cuanto solo se acreditó la entrega de los insumos y medicamentos ordenados por el galeno tratante el 5 de marzo de 2024 por tres meses, pero no hubo pronunciamiento ni prueba de haber entregado aquellos insumos y medicamentos que le fueron prescritos a favor del actor por el galeno tratante el 7 de junio del año en curso, también por tres meses.

De igual manera, su superior jerárquico, esto es, el señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria, tampoco demostró que hubiese iniciado las acciones internas necesarias para que su inferior diera cumplimiento a lo ordenado en la pluricitada providencia ni que hubiera en su contra dado apertura al respectivo proceso disciplinario, a pesar de los requerimientos efectuados.

Se reitera entonces que dentro del trámite del incidente de desacato y pese a los múltiples requerimientos que esta instancia le realizara a la obligada no se demostró el cumplimiento cabal de la orden judicial, en razón a que no se acreditó que la entidad accionada entregara los medicamentos e insumos prescritos por su galeno tratante el 07 de junio del 2024, así como tampoco autorizara el servicio de transporte requerido por el señor Hurtado González.

En virtud de ello, esta instancia considera que en el asunto bajo estudio es viable entrar a sancionar la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de la ARL AXA Colpatria, como encargada de cumplir el fallo de tutela y a su superior jerárquico, esto es, el señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria, ante el incumplimiento al fallo de tutela.

Por lo anterior, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali,

DISPONE:

PRIMERO: **DECLARAR** que la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de la ARL AXA Colpatria, y el señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria, se encuentran en abierto DESACATO frente al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela No. 202 del 04 de noviembre de 2021 proferida por este Despacho, la cual no fue impugnada.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPÓNGASE **SANCIÓN PECUNARIA** por desacato a una orden judicial de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de la ARL AXA Colpatria, y al señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria, para cada uno.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la multa impuesta deberá ser cancelada por los sancionados al día siguiente de la notificación de esta providencia, mediante consignación que se haga a nombre del Tesoro Nacional en la cuenta corriente No. 3-0820-000640-8 denominada CSJ Multas y sus Rendimientos con convenio 13474, en cualquiera de las oficinas del Banco Agrario de Colombia.

TERCERO: Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral primero, IMPÓNGASE **SANCION DE ARRESTO** por tres (3) días en contra de la señora Paula Marcela Moreno Moya, Representante Legal para Asuntos Judiciales de la ARL AXA Colpatria, y al señor Fernando Quintero Arturo, en su calidad de presidente de la ARL AXA Colpatria, lo anterior de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: CONSÚLTESE esta providencia con el superior, esto es, ante los Jueces Laborales del Circuito de Cali – oficina de reparto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591.

QUINTO: En firme esta providencia, **REMÍTASE** copia auténtica de ella a la Oficina Jurídica de la Dirección Seccional de Administración Judicial para lo de su competencia, conforme al Acuerdo No. 6979 del 18 de junio de 2010 del consejo Superior de la Judicatura.

SEXTO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedito a las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulay Camacho Calero', with a stylized, cursive script.

ZULAY CAMACHO CALERO
Juez